

6 DE ENERO DE 2024

Gustavo Petro quiere liderar la transición verde global

El presidente izquierdista de Colombia, Gustavo Petro, ha puesto la sostenibilidad ambiental, no sólo la justicia ambiental en el centro de su agenda política. Quiere vincular esta lucha con medidas contra la pobreza y la desigualdad en el país.



Gustavo Petro levanta el puño durante una manifestación en apoyo de las reformas sociales propuestas por su gobierno en Bogotá, Colombia, el 27 de septiembre de 2023.

Cable IMAGO/ZUMA

Por Pablo Castaño
Traducción
de Tim Steins

ANUNCIO



En su primer discurso como presidente en agosto de 2022, el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro, enfatizó la importancia del medio ambiente y el clima. Esto fue una novedad en un país donde la guerra contra las drogas y la política de seguridad han dominado los debates políticos durante décadas. “Sólo habrá futuro si armonizamos nuestras vidas y la economía global con la naturaleza”, enfatizó entonces el exguerrillero.

Un año después, el compromiso de Petro con la protección del medio



ambiente y la lucha contra el cambio climático sigue inquebrantable, pero también ha encontrado dificultades y resistencias iniciales. Estos reveses dicen mucho sobre los desafíos que enfrentan los países del Sur Global cuando intentan ir más allá de la dependencia de las industrias extractivas y hacer que sus economías sean más amigables con el clima.

Reducir la industria de los combustibles fósiles

El Pacto Histórico, la alianza electoral de izquierda en torno a Petro, hizo campaña para prohibir el fracking y suspender nuevos programas de producción de gas y petróleo. Estas medidas no pretenden poner fin a los acuerdos de financiación existentes, sino que pretenden ser un primer paso hacia el cierre de estas industrias. La economía de combustibles fósiles representa casi la mitad de las exportaciones de Colombia. En respuesta a los anuncios de Petro, el gigante del gas ExxonMobil suspendió inmediatamente sus operaciones en Colombia.

“En el primer año de mandato se cumplió esta promesa”, afirma Tatiana Roa, reconocida ecologista y miembro de la ONG colombiana Censat. Roa opina que el gobierno “en realidad no quiere aumentar” la producción de petróleo. Sin embargo, el Ministro de Energía y Minas, Andrés Camacho, ya debilitó la promesa electoral de Petro y declaró: “Todos los [nuevos] contratos que firmemos deben estar encaminados a una transición [verde]. Camacho se refiere así a “Energía verde”. pero no descarta por completo nuevos contratos de exploración.

Este cauteloso retroceso no es sorprendente considerando que la compañía petrolera colombiana más grande e importante es (en parte) de propiedad estatal, ecopetrol. Alejandro Mantilla, profesor de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Colombia, explica:

»Detener proyectos de exploración reduciría el precio de la bolsa ecopetrol” Permitiremos que la economía colapse y con ello dañemos las finanzas del Estado”. A pesar del escenario amenazador, el

Ministro Camacho se refiere a “contratos de exploración de petróleo y gas”

ministro Camacho enfatizó que “pretende reducir la participación [del Estado] en las industrias de CO₂”. El propio presidente Petro dejó clara la postura del gobierno en la conferencia climática COP28 en Dubai, donde reiteró: “Colombia ha dejado de firmar nuevos contratos para la exploración de carbón, petróleo y gas”.

“Si un país en desarrollo como Colombia hace algo así, ¿qué excusa y explicación tienen realmente los estados del Norte Global?”

Si Colombia quiere liberarse de la dependencia de los combustibles fósiles, esto también requerirá una profunda transformación (o reducción) del sector minero. En Colombia, la **minería** industrial es a menudo sinónimo de destrucción ambiental, crimen organizado y asesinato de activistas de la sociedad civil. La **minería** ilegal es, junto con el narcotráfico, una de las principales fuentes de ingresos de los grupos armados, que siguen activos y aterrorizan a gran parte del país incluso después de que las FARC fueron desarmadas en 2016.

Según Naciones Unidas, el 98 por ciento de los asesinatos de activistas de la sociedad civil y de derechos humanos en Colombia tienen lugar en comunidades donde se produce producción de drogas o **minería** ilegal. La llamada Comisión de la Verdad de Colombia culpó a la empresa **minera** internacional AngloGold Ashanti de financiar a grupos paramilitares que asesinaron a agricultores y líderes comunitarios. La misma empresa ha sido acusada de vandalizar fuentes de agua y desplazar forzosamente a miles de personas en la región del Cauca. AngloGold Ashanti fue una de las muchas multinacionales que el expresidente Álvaro Uribe

(en el cargo de 2002 a 2010) recibió calurosamente en el país. El propio Uribe está acusado de mantener también vínculos con las bandas paramilitares.

La nueva vicepresidenta Francia Márquez, por su parte, es conocida a nivel nacional por su lucha contra la **minería** ilegal. El propio Márquez proviene de una familia de agricultores que practicaba la **minería** tradicional a pequeña escala, que es menos destructiva que su contraparte industrial. Ahora, sin embargo, el gobierno en su conjunto debe demostrar que puede presentar una propuesta viable para transformar la poderosa industria **minera**.

El ejecutivo ya intentó prohibir la minería a cielo abierto, pero los parlamentarios conservadores lograron eliminar un artículo relevante del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno. A pesar de este revés, Petro ha anunciado una nueva ley minera diseñada para reconocer los derechos de los mineros artesanales que perdieron protecciones legales bajo gobiernos neoliberales anteriores. Queda por ver si esto será suficiente para transformar el sector minero colombiano.

Mientras tanto, los estudios han demostrado que la industria es responsable del aumento de la pobreza y la desigualdad en las regiones donde la minería es más prevalente. Con respecto a la minería del carbón, el líder sindical Igor Kareld dice: “El carbón tiene que llegar a su fin en algún momento y tenemos que estar preparados para ello. Hay que buscar oportunidades laborales en el ámbito de la transición energética y opciones de conversión en la producción. Las energías renovables podrían ser parte de la solución, según los planes de Petro.

Promover la electricidad limpia

Hoy en día, alrededor del 70 por ciento de la electricidad de Colombia se genera a partir de energía hidroeléctrica. La segunda fuente importante siguen siendo los combustibles fósiles. Hasta ahora, las energías renovables sólo han desempeñado un papel menor en la combinación

energética del país. Sin embargo, Colombia tiene una “ubicación muy favorable” para la energía eólica y solar, explica Germán Corredor, ex director de la Asociación Colombiana de Energías Renovables: “Tenemos muy buena radiación solar durante todo el año, especialmente en la costa atlántica, y también muy buenos vientos.”

Una de las zonas más adecuadas para parques eólicos es la región de La Guajira en el noreste. Esta empobrecida región cerca de la frontera con Venezuela ya está experimentando un “boom de energía eólica”: se construirán más de 60 parques eólicos. Sin embargo, el plan actual enfrenta la resistencia de la población local, compuesta en gran medida por el pueblo indígena Wayúu.

Los representantes wayúu critican que las empresas no los informaron y consultaron adecuadamente antes de iniciar los proyectos. Dicha consulta es requerida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución colombiana. Hay más desacuerdos sobre qué papel deberían desempeñar los residentes locales en la planificación de tales proyectos y cómo serán compensados por el uso de su tierra y el impacto negativo que los parques eólicos podrían tener en su economía o incluso en sus prácticas espirituales/religiosas. Otro problema: según los planes actuales, los parques eólicos no proporcionarían energía a los numerosos pueblos wayúu que todavía no tienen acceso a la electricidad, una injusticia flagrante que las empresas de energía eólica no tienen intención de remediar.

La disputa por el parque eólico de La Guajira es sólo un ejemplo de los desafíos que enfrenta Petro en la expansión de la energía renovable en Colombia. Sin embargo, el caso de la Guajira muestra de manera especial que los proyectos de energía renovable también pueden ser vistos como “sobreexplotación” y “extractivismo” si los intereses de la población local no se tienen suficientemente en cuenta.

En respuesta, el gobierno de Petro aumentó la participación en las ganancias de las plantas de energía verde para la población local del uno al seis por ciento, cambiando así las regulaciones más favorables a las

empresas aprobadas por el gobierno anterior. Además, explica el ecologista Roa, el gobierno también está tratando de fortalecer el papel del Estado en el sector eléctrico en general. Actualmente, la industria está firmemente en manos de empresas privadas.

"La posición central que Petro le ha dado al medio ambiente y al cambio climático es una verdadera novedad en la izquierda latinoamericana".

Otra pieza del rompecabezas en la estrategia de Colombia para la transición hacia las energías renovables son las llamadas comunidades energéticas: asociaciones de usuarios que producen su propia energía verde. Esta propuesta ha sido incluida por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo del país. El ministro Camacho publicó recientemente la primera convocatoria oficial para la creación de este tipo de cooperativas. Eligió deliberadamente La Guajira para anunciar el nuevo enfoque político, que pretende beneficiar a regiones con poblaciones muy dispersas y empobrecidas.

Para algunas aldeas Wayúu –y muchos otros pueblos indígenas o afroamericanos en todo el país– la propuesta de la comunidad energética podría en realidad ofrecer una alternativa viable, especialmente en áreas que aún no están conectadas a la red nacional. Actualmente es demasiado pronto para evaluar el impacto real de esta política innovadora (cuyos beneficiarios deberían ser la población colombiana y explícitamente las empresas *no* extranjeras), pero ciertamente parece prometedora de cara a una transición energética socialmente justa.

Detener la deforestación en el Amazonas

“¿Qué es más tóxico y dañino para la humanidad: la cocaína, el carbón o el petróleo?”, preguntó Petro en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022. Con su provocativo discurso en el que denunció el fracaso de la “Guerra contra las Drogas” Tras la destrucción de los bosques del Amazonas, el nuevo presidente hizo una propuesta dirigida principalmente a los países industrializados y a las instituciones financieras internacionales: “Reducir nuestra deuda externa. Entonces nuestros presupuestos se aliviarán y podremos cumplir la tarea de salvar a la humanidad y la vida en este planeta. « Petro se refería específicamente a la protección de los bosques tropicales, que se sabe que desempeñan un papel clave en la absorción global de CO₂ y la protección del Juego biodiversidad.

El presidente colombiano no está solo con sus demandas: el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, también ha pedido cooperación internacional para detener la catástrofe en la Amazonía brasileña, que registró niveles récord de deforestación entre 2019 y 2023 bajo el gobierno radical de derecha de Jair Bolsonaro y los incendios forestales registrados. En un discurso ante varios miembros del Parlamento de la UE en 2022, Lula pidió ayuda a la Unión Europea para frenar esta deforestación y promover sectores económicos alternativos como la industria farmacéutica o cosmética brasileña. En Colombia, el Pacto Histórico propuso en su programa electoral de 2022 la promoción del turismo, la agricultura orgánica y el uso de “productos no madereros” del bosque como reemplazo de actividades económicas como la ganadería, que siempre van acompañadas de una mayor deforestación. .

En el primer trimestre de 2023, la deforestación en la Amazonía colombiana cayó un 76 por ciento . Roa cree que esta mejora es (entre otras cosas) una consecuencia del cambio de estrategia forestal desde que Petro asumió el cargo. Durante el anterior gobierno de derecha, la “política de conservación de la naturaleza” consistió principalmente en

el acoso policial y militar a los agricultores cuando talaban madera en áreas forestales protegidas. Como explica Roa, los agricultores a menudo talaban un área particular, la cultivaban y luego eran expropiados por grandes terratenientes que compraban o se apoderaban de la tierra por la fuerza. Los agricultores se vieron obligados a talar áreas forestales adicionales a lo largo de un “límite de selva tropical” cambiante.

El gobierno de Petro ahora confía en “acuerdos con agricultores para implementar nuevos modelos de producción” que no dañen el bosque. El cambio de política también afecta la forma en que el gobierno colombiano maneja las drogas: el nuevo plan de Petro para combatir la producción y el contrabando de drogas estipula que “los cultivadores de coca se convertirán en guardabosques”. Su principal tarea, además del cultivo comercial, es la protección de la selva tropical.

En agosto de 2023, Petro y Lula se reunieron con los líderes de los otros seis países amazónicos para reactivar la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OCTA). Los ocho gobiernos sudamericanos acordaron buscar “modelos de financiamiento innovadores” para proteger la selva tropical; En este sentido, se volvió a abordar el tema de la deuda externa. Mientras tanto, Colombia y Brasil se pusieron manos a la obra y se comprometieron a alcanzar la meta de “deforestación cero” para 2030.

Sin embargo, Lula no siguió la sugerencia de Petro de detener por completo la producción de petróleo y carbón en la región amazónica. Sin embargo, el lema de Petro de “deuda por vidas” está ganando popularidad lentamente en el Sur Global, aunque no cuenta con el apoyo de ningún país deudor ni de ninguna institución financiera internacional. [El presidente estadounidense Joe Biden anunció recientemente una “donación” de 500 millones de dólares al fondo existente de Amazon , pero no dijo nada sobre un posible alivio de la deuda.]

"Si el gobierno logra hacer

incluso un pequeño cambio de rumbo hacia una economía más ecológicamente sostenible, puede ser un ejemplo muy valioso para los gobiernos y los movimientos sociales de todo el mundo".

Sin embargo, el ecologista Roa se muestra escéptico ante la sugerencia de Petro. Teme que la deuda externa del país no se cancele, sino que se contraiga nueva deuda sólo para medidas de protección del medio ambiente. "Seguimos atrapados en un ciclo de soluciones falsas: financiarización de la conservación de la naturaleza y sistemas de compensación basados en finanzas." El sistema Petros propuesto es demasiado similar al mercado global de carbono existente. Este sistema de comercio de emisiones permite a las empresas contaminantes compensar sus emisiones mediante medidas que (supuestamente) compensan la misma cantidad de emisiones, por ejemplo, ayudando a proteger un área de bosque en Colombia que de otro modo sería deforestada. Sin embargo, un estudio publicado recientemente concluye que la cantidad de emisiones compensadas por los mecanismos del mercado de carbono es mucho menor de lo que se afirma.

Sin embargo, la propuesta de Petro tiene la ventaja de reintroducir en los debates internacionales la cooperación entre el Norte y el Sur en el ámbito de la justicia climática. Esto exige que los países ricos y las instituciones financieras internacionales hagan su parte para proteger los bosques tropicales, de los que depende nada menos que la salud y la supervivencia de toda la *raza* humana.

Un modelo que sienta precedente a nivel

Un modelo que sienta precedente a nivel global (?)

La centralidad que Petro le ha dado al medio ambiente y al cambio climático es una verdadera novedad en la izquierda latinoamericana. El giro hacia la izquierda a principios del siglo XXI [Marea rosa o marea rosa] fue impulsado principalmente por el aumento de los precios de las materias primas y las ganancias inesperadas asociadas a la extracción de materias primas, que podrían utilizarse para políticas sociales progresistas. Para Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Néstor y Cristina Kirchner o el primer gobierno de Lula en Brasil, la descarbonización nunca fue una prioridad máxima: todos (con razón) se centraron primero en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza.

El decidido compromiso de Petro con una transición verde es encomiable, especialmente en un país cuyas exportaciones anuales de petróleo generan alrededor de diez mil millones de dólares pero que es responsable de menos del uno por ciento de las emisiones globales de CO₂. La contribución relativamente pequeña de Colombia al cambio climático ciertamente hace que sea más difícil convencer a los votantes de la urgencia de descarbonizar la economía nacional. Pero eso no ha impedido que el presidente de tendencia izquierdista tome medidas importantes para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, transformar el sector minero, promover la energía verde y proteger la Amazonía. Estas políticas verdes están vinculadas a una ambiciosa agenda social para combatir la desigualdad y la pobreza. Además, Petro ha enfatizado su intención de construir un modelo que pueda replicarse a nivel mundial. También respaldó esto con gestos de alto perfil, como su apoyo a un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, propuesto por estados cuya existencia está amenazada por el aumento del nivel del mar.

Sin embargo, no se debe subestimar la dependencia del camino en un país que ha vivido durante décadas de la extracción y exportación de sus valiosos recursos naturales. Al iniciar la transición verde del país, Petro va en contra de los intereses de las poderosas élites empresariales que

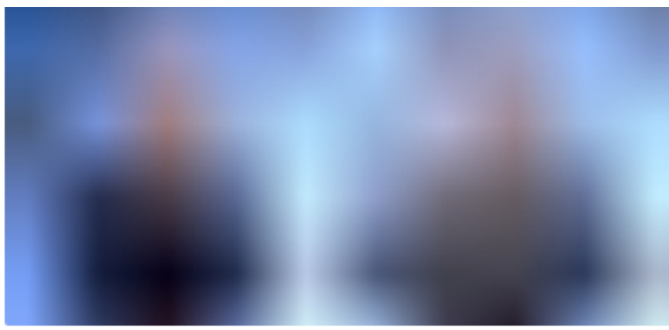
va en contra de los intereses de las poderosas elites empresariales, que están bien representadas en el parlamento por varios partidos establecidos. Sería ingenuo esperar que Colombia sea un país mucho más “verde” en 2026, cuando finalice el actual mandato presidencial.

Pero si el gobierno logra hacer aunque sea un pequeño cambio hacia una economía ambientalmente más sostenible, puede dar un ejemplo muy valioso para los gobiernos y los movimientos sociales de todo el mundo. Sobre todo, surgiría cada vez más la pregunta: si un país en desarrollo como Colombia hace algo como esto, ¿qué excusa y explicación tienen realmente los estados del Norte Global?



just one moment ...





Wie Japan Teil des Westens wurde

Japan war das erste kapitalistische Land in
Japón fue el primer país capitalista de Asia y
ahora es parte integral de las alianzas
occidentales. Esto no es una coincidencia: los
EE.UU. en particular se han asegurado de
integrar al país en su bloque militar,
económica e ideológicamente.

POR BENJAMÍN SCHIFFL



Erdogan ist kein Freund Palästinas

Die harschen Äußerungen des türkischen
Sobre la guerra de Gaza pueden parecer
audaces, pero las relaciones comerciales de
Turquía con Israel cuentan una historia
diferente. En última instancia, las
bravuconadas de Erdoğan son un intento
cínico de apuntalar el menguante apoyo de su
base.

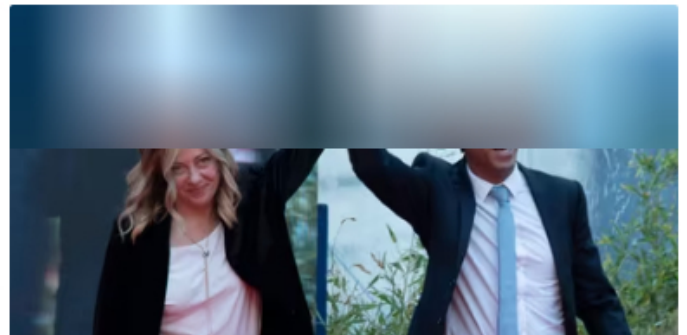
POR AIDAN SIMARDONE



Cuando el economista cierra el agua

El acceso al agua en Nairobi, la capital de
Kenia, es extremadamente desigual. El Banco
Mundial, una empresa y dos economistas del
desarrollo pensaron que se daban las
condiciones perfectas para un experimento
con los pobres como conejillos de Indias.

POR ADRIAN WILSON, FAITH KASINA, IRENE
NDUTA Y JETHRON AYUMBAH AKALLAH



Los intransigentes en materia de migración son la nueva corriente principal

El curso radical antiinmigración de Giorgia
Meloni y Rishi Sunak está ganando cada vez
más apoyo entre los centristas de la UE. En
vísperas de las elecciones europeas de 2024,
se está formando un gran bloque que incluye
a la extrema derecha.

POR DAVID BRODER Y RICHARD BRAUDE



15

Medio tiempo

Lo único que ahora mismo tiene peor
pinta que el semáforo es la alternativa.